



Provincia del Chaco – Poder Ejecutivo

“2023-Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia en la República Argentina”. Ley N° 3749-A

Número:

Referencia: EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA Y PENITENCIARIA

VISTO: La Ley 2011-J y la Actuación Electrónica N° E7-2023-2452-Ae;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 2011-J, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema provincial de seguridad pública y determina que compete al Poder Ejecutivo, la implementación de las políticas del mencionado sistema;

Que, conforme lo prescripto en el artículo 2° de la mencionada ley, la seguridad pública es la situación política, institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente libertades y derechos, comprendiendo el conjunto de las acciones institucionales y sociales tendientes a resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos de las personas a través de la prevención, conjuración e investigación de los delitos, las infracciones y los hechos vulneratorios del orden público dentro del ámbito provincial;

Que, la detección de nuevas modalidades delictuales, constituye una problemática de público conocimiento que exige la adopción por parte del Estado de políticas integrales y soluciones concretas en materia de seguridad con carácter urgente e impostergable;

Que, no obstante, las políticas en materia de seguridad pública implementadas durante los últimos años, la realidad del delito encontró al Estado con una capacidad limitada para dar respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad;

Que, esta situación se ve agravada por la afectación de personal policial a tareas de custodia y cuidado de personas privadas de libertad alojadas en dependencias policiales, en tanto, toda actividad relacionada con la misma, encontrándose fuera de las funciones propias de la policía de prevención y de investigación judicial, implica necesariamente

propiciar un detrimento del servicio de seguridad pública, en razón de que exige destinar recursos humanos y materiales a una función que no es propia del servicio policial, lo que genera una desprofesionalización de los integrantes de nuestra fuerza de seguridad;

Que, por imperio de las disposiciones legales provinciales, nacionales e internacionales aplicables en la materia, las personas privadas de la libertad sobre las que se han dictado medidas cautelares de prisión preventiva y aquellas que han sido condenadas, deben ser alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario de la Provincia;

Que, de los informes suministrados periódicamente se evidencia que las personas alojadas en las dependencias policiales registran distintas situaciones, que comprende aquellas alojadas transitoriamente, otras imputadas sin condena y también condenadas, cuya situación procesal responde la etapa de ejecución de la pena;

Que, la crítica situación generada requiere de la adopción en forma urgente de medidas que tengan por objeto brindar una solución inmediata a la problemática planteada, requiriendo en consecuencia, incrementar la capacidad de instalada y de alojamiento en las dependencias bajo la órbita del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social;

Que, la provincia adhirió a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, cuyo artículo 34 que establece la competencia respecto al narcomenudeo en la provincia y en cuanto al narcotráfico en la justicia federal, por lo que resulta fundamental coordinar acciones en todo el territorio provincial que permitan llevar adelante los procedimientos y las acciones judiciales tendientes a eliminar el tráfico de estupefacientes en menor y mayor escala;

Que, en este sentido la provincia, en el año 2022, constituyó la “Mesa contra el Narcotráfico”, la cual se integra por representantes de los tres poderes del Estado, las fuerzas de seguridad y la Justicia tanto provincial como federal, quienes mantienen reuniones periódicas, con el objeto de generar un plan de política criminal de lucha, con acciones preventivas, disuasivas y reactivas;

Que, asimismo, dicha Mesa elaboró y presentó el Plan “Chaco Sin Narcotráfico”, cuyos ejes principales se vinculan con la definición de barrios con mayor nivel de conflicto para una intervención multidisciplinaria; la determinación de un protocolo conjunto de actuación para estandarizar las intervenciones y competencias judiciales provinciales y federales a fin de optimizar la investigación y los operativos;

Que, el incremento en los índices delictivos vinculados al narcomenudeo y narcotráfico, sumado a las constantes demandas sociales de acciones concretas en la lucha contra estos delitos que revisten especial gravedad y hacen necesario el dictado de medidas efectivas direccionadas a hacer frente al terrible daño social que las pequeñas organizaciones barriales producen en las personas que habitaban las zonas urbanas, capaces de generar un impacto en el mercado de la droga;

Que, debe tenerse presente que la realidad de la sociedad actual se modifica constantemente por el impacto de las nuevas tecnologías, las que anclaron en el universo criminal y diversificaron al delito, así recientemente organizaciones internacionales han afirmado que se debe estar preparando para el riesgo cierto de que los entornos inmersivos en línea - en otras palabras, el "metaverso"- puedan crear nuevos tipos de ciberdelincuencia y permitir que los delitos existentes se realicen a mayor escala;

Que, la cibercriminalidad ha llegado a la provincia del Chaco y ha modificado a las firmas de comisión de los delitos tradicionales, tal y como se conocían, por lo que son necesarias medidas urgentes que conduzcan a dar respuestas que estén a la altura de las circunstancias, previo a que se maximice su propagación;

Que, el delito es un fenómeno multicausal resultando de suma importancia el abordaje integral tanto para su prevención como su combate, a través de acciones directas en el territorio, que impliquen inversión en tecnología con la integración del Sistema Multiagencial de Emergencias y ampliación del sistema integral de videovigilancia con incorporación de trescientas (300) cámaras, transporte seguro, prevención y control territorial para calles seguras y establecimiento de corredores seguros, presencia policial, mejora del sistema de denuncias, ampliación de la capacidad instalada para detenidos del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social incorporando ochocientos (850) nuevos cupos, y eficiencia, publicidad, oralidad y agilidad para el proceso penal con el impulso de una serie de iniciativas legislativas, entre otras;

Que, por otra parte y en pos de agilizar la adopción de las acciones necesarias, deviene indispensable autorizar la implementación de un conjunto de medidas para el fortalecimiento de las instituciones policial y penitenciaria, y la potenciación de sus áreas operativas y, en consecuencia, del sistema de seguridad pública;

Que, asimismo, resulta esencial dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento, suministros, servicios y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad en el territorio provincial;

Que, por imperio de sendos instrumentos internacionales de rango constitucional y normativa nacional y provincial, se requiere la adecuación de la situación fáctica actual descrita previamente, para lo cual resulta necesario declarar un estado de emergencia en materia de seguridad pública y penitenciaria y de en todo el ámbito de la Provincia del Chaco;

Que, el presente instrumento se dicta en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo N° 141 de la Constitución Provincial (1957-1994) y la Ley 3108-A;

Por ello;

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:**

Artículo 1º: Declárase la emergencia en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria en todo el territorio de la Provincia del Chaco, por el plazo de un (1) año, con el objeto primordial de atender a la seguridad pública y al sistema penitenciario provincial a los fines brindar seguridad a la población, garantizar la protección integral de la vida, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.

Artículo 2º: Establécese que será autoridad de aplicación de las disposiciones y medidas de ejecución del estado de emergencia que se declara por el presente, el Ministerio de Seguridad y Justicia, facultándolo a dictar el “Plan de Contingencia” a adoptarse en el marco de la emergencia declarada y que deberá comprender entre sus acciones:

- a) La puesta en funcionamiento del Sistema Multiagencial de Emergencia;
- b) La incorporación de trescientas (300) nuevas cámaras al Sistema Integral de Vigilancia actualmente en funcionamiento;
- c) La generación de ochocientos cincuenta (850) nuevos cupos para alojamiento en el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social;
- d) La incorporación de sistemas de video vigilancia propios y/o en convenios con municipios, como así también todo equipamiento y tecnología para fortalecer el sistema de seguridad pública y el Servicio Penitenciario;
- e) Promoción de medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales, a fin de fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero;
- f) Implementación del Programa de capacitación continua para los agentes de Policía y del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social;
- g) Impulso de acciones para la persecución de todas las actividades ilícitas relacionadas con las armas de fuego y municiones como medida para la reducción de la violencia;
- h) Adquisición de combustible que se necesite para cubrir los operativos extraordinarios que puedan derivar de la situación de emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario y de equipamiento para capacitación del personal a cargo de los grupos especiales y operativos;
- i) Demás medidas pertinentes para alcanzar los fines propuestos;

Artículo 3º: Instrúyase al Ministro de Seguridad y Justicia a adoptar las medidas tendientes a reorganizar y planificar los aspectos de gestión, operativos y funcionales, de recursos humanos y materiales del Sistema de Seguridad Pública provincial integrado por la Policía de la Provincia del Chaco y el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia del Chaco, con la finalidad de priorizar las políticas en materia de prevención del delito y la afectación de personal policial a funciones operativas.

Artículo 4º: Facúltase al Ministerio de Seguridad y Justicia a la elaboración de un plan de reequipamiento para los próximos sesenta días, a los fines de garantizar la provisión de todos aquellas bienes de consumo y servicios necesarios para dotar a la policía y al servicio penitenciario de los elementos destinados al entrenamiento del personal, y en general, para enfrentar la emergencia que se declara

Artículo 5º: Autorícese al Ministerio de Seguridad y Justicia, en el marco de la emergencia declarada, a instar y/o ejecutar obras y a contratar la provisión de servicios y suministros necesarios en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 2011-J de Seguridad Pública y en el marco de la emergencia declarada.

Artículo 6º: Establécese que a través de las jurisdicciones correspondientes se deberá diseñar y ejecutar políticas interministeriales y municipales para el fortalecimiento de la seguridad pública, tales como:

- a) Generación, reparación y mejoramiento de infraestructura para actividades deportivas, recreativas y de capacitación laboral en escuelas de jóvenes, personas adultas y en centros de capacitación laboral, en todo el territorio de la Provincia;
- b) Implementación de un programa de creación de espacios seguros, destinado a la limpieza y saneamiento de espacios públicos y/o privados, baldíos, iluminación en todos los municipios y comunas de la Provincia;
- c) La implementación de Programas de Vinculación y Coordinación Institucional con los Municipios y Comunas, con organismos estatales descentralizados y autárquicos, en relación a sus competencias propias y que influyen en el fortalecimiento de la seguridad pública;
- d) Implementación de un programa de asistencia a los centros educativos públicos para que cuenten con la presencia efectiva de por lo menos dos días a la semana de un Gabinete Psicopedagógico;
- e) Implementación de un programa de asistencia y concientización para padres y responsables de personas menores de edad que hubieren tenido más de dos ingresos en sede policial como consecuencia de hechos tipificados en el código de faltas o código penal;

Artículo 7º: La Provincia del Chaco a través de los organismos y reparticiones pertinentes dispondrá los mecanismos que fueren procedentes a efectos de implementar y/o complementar los programas que se dispongan en el marco de la emergencia declarada.

Artículo 8º: Establécese que la erogación que demande la ejecución de la presente se deberá imputar a la Jurisdicción 7, Ministerio de Seguridad y Justicia conforme la naturaleza del gasto.

Artículo 9º Facúltase al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en el marco de la emergencia declarada por el presente instrumento.

Artículo 10: Ínstese al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial de la Provincia del Chaco, a los fines de que establezcan mecanismos que agilicen la efectivización del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional N° 20.785 y la Acordada 2/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Ley provincial N° 1238-A, entregando en depósito los bienes secuestrados y/o decomisados, para su utilización con destino y afectación al cumplimiento de la función de seguridad pública y ciudadana.

Artículo 11: Determinése que los vehículos adquiridos o incorporados a través del mecanismo consignado precedentemente serán destinados a la Policía de la Provincia del Chaco y deberán, sin excepción, estar identificados con la leyenda "Policía de la Provincia del Chaco", logo distintivo y número identificadorio en ambas puertas delanteras, quedando exceptuados aquellos que cumplan tareas estrictamente investigativas y cuyo listado será comunicado al Ministerio de Seguridad y Justicia.

Artículo 12: Convócase al Consejo Provincial de Seguridad Pública, con carácter urgente, para que en ejercicio de sus atribuciones colaboren con las autoridades provinciales en la elaboración de planes, proyectos y propuestas, así como en la implementación de políticas que resulten necesarias a efectos de garantizar la seguridad ciudadana.

Artículo 13: Comuníquese al Poder Legislativo.

Artículo 14: Comuníquese, dese al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.